



09 de noviembre de 2011

[Imprimir Página Web](#)

Argentina: el proceso electoral en un contexto de crisis

Pablo Gerchunoff

ARI N° 51-2002 - 17.9.2002

El presidente Eduardo Duhalde -cuyo mandato finaliza en septiembre de 2003- había convocado elecciones primarias abiertas y simultáneas en todos los partidos políticos para noviembre y comicios generales anticipados para elegir presidente en marzo. Más tarde, los conflictos internos del Partido Justicialista (PJ) le obligaron a retrasar las elecciones internas hasta diciembre, pero mantuvo la convocatoria de marzo. Hoy, con las heridas aún abiertas en su partido, nadie podría confirmar ni las reglas electorales ni las fechas. Podría haber elecciones internas o no; podría confirmarse la convocatoria de marzo, anticiparse o incluso demorarse. Mientras tanto, el gobierno no puede resolver ninguno de los problemas que deberían constituir sus prioridades de agenda, de modo que las tareas de la futura administración se tornan más complejas de lo esperado.

La situación actual

La situación actual es sumamente complicada. Millones de ahorradores no saben cuánto han perdido con la devaluación y simultánea conversión compulsiva de sus depósitos de dólares a pesos (*pesificación*). La amenaza de juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia que el mismo Duhalde alentó en febrero, sólo consiguió que el tribunal contraatacara con fallos que, periódicamente, neutralizan las iniciativas oficiales para frenar los amparos judiciales de los ahorradores. El poder ejecutivo no logra reagrupar ni siquiera a los legisladores de su propio partido, de modo que el Congreso apenas disimula su estado de hibernación. Es imposible descubrir si la actual administración pelea todavía por un acuerdo con el FMI o si se ha resignado a terminar su mandato sin él. Tampoco es posible averiguar si avanza hacia un arreglo, al menos provisional, con las empresas privatizadas de servicios públicos, que tienen sus precios congelados, o si prefiere dejar a las nuevas autoridades ese incómodo regalo. La renegociación de la deuda con los acreedores externos nunca comenzó. Los atentados a la seguridad de las personas han cobrado una considerable dimensión política pero, comprensiblemente, el presidente no tiene para ellos una respuesta inmediata.

En este difícil escenario, el presidente Duhalde puede, sin embargo, adjudicarse dos victorias políticas: la de haber evitado la hiperinflación que muchos economistas pronosticaban en enero y haber mantenido un cierto control social en las calles, sobre todo en los cinturones populares de los grandes centros urbanos. Esas victorias le han preservado un lugar relevante como elector calificado de la candidatura presidencial de su partido. Por el momento, ha usado ese poder en forma errática. Hace dos semanas parecía buscar un acuerdo con Adolfo Rodríguez Saá para derrotar definitivamente a Carlos Menem; tan solo hace una semana parecía buscar un acuerdo con Carlos Menem para derrotar definitivamente a Adolfo Rodríguez Saá. En los últimos días ha retornado al punto de partida: sostiene no tener un favorito.

La crisis de los partidos

Si hay algo que caracterice el vertiginoso proceso político argentino es el descrédito de las instituciones de la república: la Presidencia, el Congreso, la Corte Suprema, las gobernaciones y las legislaturas provinciales comparten, justificadamente o no, las sospechas de corrupción y el rechazo de gran parte de la sociedad. Pero el estigma cae con más intensidad que en cualquier otro caso sobre los partidos políticos, y en particular sobre los dos grandes partidos de masas que vienen dominando la escena pública desde la inmediata post-guerra. La Unión Cívica Radical (UCR) es el ejemplo más dramático. En 1983, la UCR aglutinó las esperanzas de cambio de la sociedad al iniciarse la transición democrática; hoy es una organización paralizada por el estupor ante su propio e inminente colapso electoral. Si bien conserva un arraigo importante en varias provincias (Córdoba y Mendoza entre las más pobladas), está sufriendo una fuerte pérdida de apoyo en lo que fue su cuna: la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. De acuerdo con las encuestas, hoy estaría lejos de constituir la segunda fuerza del país y, por lo tanto, de participar en una eventual segunda vuelta electoral. Rodolfo Terragno, ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, y Ángel Rozas, gobernador de El Chaco, se están disputando un caudal de votos que por ahora no alcanza al 8%. Raúl

Alfonsín, quien fuera hasta hace poco tiempo su líder casi indiscutido, es uno de los tres dirigentes nacionales con peor imagen. La renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia el pasado 20 de diciembre recordó a los argentinos que el propio Alfonsín no había

logrado completar su mandato en 1989 y terminó de cimentar la creencia -hoy muy extendida- de que la Unión Cívica Radical no es un partido preparado para ejercer el gobierno.

Los avatares del Partido Justicialista son distintos. Es la mayor fuerza política del país, con un piso electoral no menor al 25%, pero sin un liderazgo nítido. Pese a que la desprestigiada gestión de Duhalde le está afectando, son muy pocos los que dudan de que de sus filas saldrá el próximo presidente. Esa convicción exacerba la lucha interna y convierte a todo el país en su teatro de operaciones, pero no cambia el hecho de que la desilusión colectiva sobre la productividad social de la política lo envuelve tanto como al radicalismo. Por ello, a sus dos principales candidatos el camino se les ha vuelto más llano. Han elegido hacer lo que saben, armar sus campañas como caudillos iluminados y no como dirigentes políticos de nuevo cuño. Adolfo Rodríguez Saá, al frente de las encuestas, con un 17% de intención de voto, intenta encarnar con un discurso y un estilo populistas las aspiraciones de reparación social de los sectores marginados; Carlos Menem, que a pesar de su enorme poder económico no consigue superar el 7%, quiere presentarse como un piloto experto en tormentas que puede dominar el caos, como lo hizo en 1989. Ambos anteponen sus figuras a la del partido y en el caso de Rodríguez Saá ese orden de prelación es tan marcado que ha formado su propia organización, exhibiendo un deliberado desdén por el sello del justicialismo. Es cierto que el personalismo es una marca de nacimiento del peronismo, pero nunca como ahora ese personalismo se había manifestado en medio de tanta descalificación de la política. Aún los precandidatos más convencionales del justicialismo, los que como Néstor Kirchner y José Manuel de la Sota no están en condiciones de presentarse con perfiles caudillistas y prefieren (o están obligados) a refugiarse, cada uno con sus matices, en propuestas más o menos racionales y más o menos programáticas, lo hacen distanciándose de las estructuras partidarias y procurando dar de sí mismos una imagen de autonomía respecto a las burocracias.

La debilidad de los dos grandes partidos argentinos no está compensada hoy con el nacimiento de fuerzas políticas nuevas, mínimamente organizadas y homogéneas. La Alternativa para una República de Iguales (ARI) descansa también sobre una convocatoria personal, en este caso la de Elisa Carrió, una diputada de origen radical que no ha renunciado al partido y que, de acuerdo a las encuestas, se ha estancado en un porcentaje cercano al 15% de

intención del voto. Ciertamente no es poco, y hoy le sería suficiente para competir en la segunda vuelta. Pero, en rigor, el ARI no es, todavía, un partido político. Su militancia la constituye un aluvión anárquico en el que conviven intelectuales independientes desilusionados con la experiencia gubernamental de la Alianza, dirigentes territoriales del peronismo y el radicalismo que en algún momento del pasado reciente perdieron sus liderazgos parroquiales, y el partido socialista recientemente unificado –hoy pequeño en Argentina-. Quizás a pesar suyo, Elisa Carrió ha terminando reuniendo a aquellos mismos que a mediados de los noventa se aglutinaron alrededor de Carlos "Chacho" Álvarez y que fracasaron en el intento de "renovar las prácticas políticas" y "terminar con el bipartidismo". ¿Podrá el ARI extenderse más allá de lo que pudo hacerlo el FREPASO en la geografía política? Es improbable. Por un lado, encuentra un límite en el crecimiento de la izquierda, muy fortalecida durante los últimos dos años y que ha encontrado un factor aglutinante en el diputado Luis Zamora. Por otro, todavía está por verse si puede alimentarse de la crisis del radicalismo más de lo que lo ha hecho hasta ahora. El resto es, por el momento, inaccesible para Elisa Carrió: el justicialismo retiene sus votos; las provincias pobres que no gobierna el justicialismo son feudos bien amurallados.

Desde otro cuadrante del espacio político, Ricardo López Murphy (se acerca a un 10%), comparte vicisitudes simétricas a las de Elisa Carrió. Economista de convicciones ortodoxas y ex afiliado a la UCR, López Murphy no ha logrado hasta ahora realizar su aspiración principal: conformar una colectividad política de centro-derecha con compromisos republicanos suficientemente enraizados como para no dejarse tentar por experimentos autoritarios. Por el momento, el ex ministro de Defensa de Fernando de la Rúa sólo seduce a quienes ya había seducido: los asiduos concurrentes a los seminarios de la *City* porteña, los ejecutivos del sistema financiero, los militares más alejados de las corrientes nacionalistas y una parte de los votantes de derecha de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que no se puede culpar a López Murphy de su fracaso: Argentina nunca tuvo –desde que en 1912 se instaurara el sufragio universal– un partido nacional con las características que él pretende. Si logra ganarse otras simpatías en la sociedad y extender su base territorial, tendrá que hacerlo atrayendo votantes del ala moderada del radicalismo o formando un frente con partidos provinciales con experiencia en lograr concesiones económicas del gobierno nacional. No parece un escenario prometedor. La combinación de un partido nacional débil asociado a partidos provinciales fuertes en sus distritos augura problemas de gobernabilidad y, de todas maneras, no logra el apoyo suficiente para disputarle el triunfo electoral al justicialismo. Como tantas otras veces en las idas y vueltas del centro-derecha argentino, lo más probable es que López Murphy termine siendo una pieza –la que presta credibilidad ante los mercados de capitales– de una futura coalición de gobierno.

Reformas electorales a medida

El panorama actual –partidos tradicionales divididos y, como en el caso de la UCR, hasta en riesgo de desintegración, a los que se agregan nuevas fuerzas políticas constitutivamente frágiles– puede ser una amenaza para el futuro de la democracia. En ese caldo de cultivo se cuece una segunda amenaza: la de convalidar legislativamente esa debilidad institucional. El PJ necesita resolver su conflicto de poder antes de las elecciones internas del 15 de diciembre, ya que, de otro modo, se enfrenta al peligro de la división. Lo puede resolver de dos maneras: o bien a través de un pacto en el que quede ungido un candidato de consenso, o bien adaptando las leyes electorales a la medida de sus necesidades. Si opta por el segundo camino, nada le viene mejor que cancelar las elecciones internas y aprobar una ley de lemas para las elecciones generales. El mecanismo es sencillo: se presentan varias fórmulas en cada partido y la ganadora recoge los votos de las otras. Para el justicialismo, la fragmentación se convierte en acumulación de fuerzas y tiene una alta probabilidad de ganar las elecciones en la primera vuelta. El problema es que la ley de lemas no sólo es rechazada por la abrumadora mayoría de los partidos con representación parlamentaria sino que –lo

principal- viola la Constitución, que prohíbe la suma de votos de distintas fórmulas, aunque pertenezcan al mismo partido. Por eso, el justicialismo está en efervescencia, buscando procedimientos que lo saquen de la trampa en que está metido por su propia división. Un diputado ha sugerido una "ley de lemas atenuada": se suman los votos de las distintas fórmulas pero sólo para determinar cuáles serán los dos partidos que, a través de sus fórmulas más votadas, concurrirán a la segunda vuelta. En este caso, la inconstitucionalidad no es tan clara. Lo que sí resulta obvio es que el presidente elegido a través de esta regla electoral deberá negociar permanentemente con quienes, finalmente, sean sus pares, y carecerá de la fuerza propia para afrontar la crisis.

Los contenidos de la campaña

Lo cierto es que los distintos candidatos casi no han comenzado sus respectivas campañas. Pero si de cuanto se ha visto hasta ahora se pudiera extraer una primera impresión, contribuiría a alimentar la incertidumbre política. En el centro del arco político, unos pocos aspirantes –Ricardo López Murphy, Rodolfo Terragno, en parte Néstor Kirchner- han comenzado a pronunciar discursos de gobierno. El resto es una combinación de populismo, voluntarismo, utopismo radical. Entre quienes tienen alguna probabilidad de ganar las elecciones quizás destaque Adolfo Rodríguez Saá en el plano retórico. Ha proclamado que no pagará la deuda externa ilegítima -exhumando una consigna que recorrió América Latina durante los años ochenta- pero le bastará con hacer efectiva una quita de capital que los mercados de capitales ya dan por descontada para cumplir con su promesa; ha dicho que derogará todas las leyes vigentes en un único acto de gobierno que deberá convalidar el Congreso, pero con el transcurrir del tiempo vincula cada vez más la propuesta de *tabula rasa* con las necesidades de una reforma fiscal de fondo; ha adherido a la consigna de la caducidad de los mandatos ("que se vayan todos"), pero ni siquiera sopesa la eventualidad de una abstención electoral si esa propuesta aborta antes de las elecciones; ha tocado muy ocasionalmente los temas de seguridad personal y represión del delito, pero acepta gustoso el apoyo del ex militar carapintada Aldo Rico, que por ahora lidera las encuestas para las elecciones a gobernador en la golpeada provincia de Buenos Aires. Rodríguez Saá muestra las dos caras de Jano, mantiene la ambigüedad y conserva su capacidad de maniobra política. Sin embargo, quizá no le sea suficiente una retórica sagaz. Si necesita extenderse más allá de los límites del peronismo tradicional, tendrá que superar la imagen autoritaria y patrimonialista que se ganó como gobernador de San Luis y durante su breve paso por la presidencia de la Nación.

Elisa Carrió y Carlos Menem tienen menos margen de maniobra política y, consecuentemente, menos margen para el crecimiento electoral. En el caso de Carrió, es resultado de sus propios errores. A principios de año, ella combinaba con habilidad sus investigaciones sobre actos ilícitos de banqueros y políticos con la apelación deliberadamente mística al levantamiento popular, expresado en las urnas, contra la "corrupción del régimen que se derrumba" y el reclamo de un capitalismo más transparente. Había entonces una mezcla original de regeneracionismo y socialdemocracia que prometía réditos y abría las puertas para una coalición amplia. Ahora está en las antípodas: ha quedado encerrada por su decisión de suspender la campaña electoral hasta obtener la revalidación anticipada de todos los mandatos, y en ese encierro sólo está acompañada por una izquierda que, de todas maneras, no la votará. El problema es que la consigna "que se vayan todos", que cuenta con una importante simpatía popular, carece de traducción operativa salvo a través de una reforma constitucional cargada de riesgos y que la mayoría parlamentaria le negará. En el desarrollo actual de la campaña, una de las incógnitas a develar es qué hará Elisa Carrió para rearmar su estrategia.

Carlos Menem cierra el círculo. Cuando tenía 58 años y sólo era conocido como caudillo y gobernador populista de la provincia de La Rioja, construyó un discurso político liberado de responsabilidades y compromisos, asestó el golpe de gracia al ya debilitado gobierno de Raúl Alfonsín y llegó a la presidencia. Trece años después vive su propio

encierro: es un esclavo de su gestión de gobierno, a la que no tiene más alternativa que aferrarse y defender. Es, por lo tanto, esclavo también de cada palabra que pronuncia desde esa actitud defensiva: propone dolarizar la economía o volver a la convertibilidad, a pesar del rechazo que ambas alternativas generan entre sus escasos amigos de la administración republicana; afirma que la pena de muerte es la única solución para el crecimiento del delito; niega cualquier responsabilidad en el explosivo crecimiento de la desigualdad y el desempleo; pronostica impacientemente un colapso económico, porque supone que eso revalorizaría su candidatura. Ciertamente, no está en condiciones de reconstruir una mayoría como la que logró liderar durante diez años. Es probable que Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió tampoco lo estén. Esto hace aún más patente el peligroso vacío que existe en el escenario electoral argentino: el de una figura que encarne alguna variante del centro popular democrático. Quizás esa figura era el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, que por ahora sigue confirmando su distancia de la puja electoral. Quizá no aparezca quien lo reemplace. Pero lo que es seguro es que esa es la pieza que está faltando en el tablero.

Conclusiones

Reconstruyamos el cuadro. Un presidente de transición que está cargando la agenda de su sucesor con las tareas que no puede llevar a cabo; conflictos que parecen no tener fin entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia; partidos políticos tradicionales divididos -como es el caso del justicialismo- o en estado de descomposición -como es el caso del radicalismo-; nuevas fuerzas prematuramente anémicas y que, por lo tanto, no llenan el vacío; candidatos que despiertan entusiasmos efímeros o ningún entusiasmo; ausencia de alguna variante del centro popular democrático; peligro de un alto porcentaje de voto negativo, como ocurrió en octubre de 2001; predominio de los liderazgos territorialmente acotados de los gobernadores provinciales; campañas electorales que apenas son un tanteo y que avanzan por ensayo y error, con más errores que ensayos; propuestas de reformas electorales decididamente inconstitucionales de las que luego se da marcha atrás; demandas sociales que presionan por una imposible resolución inmediata de los problemas económicos y de seguridad personal. ¿Encierra esta combinación de elementos un riesgo para la democracia? La respuesta a este interrogante no la tienen los actores de reparto de la escena política, sino el que es hoy el protagonista: el justicialismo. Si sus dirigentes nacionales -incluido Duhalde- se ponen de acuerdo en el nombre del candidato, o en las reglas de la competencia para escogerlo, y si esas reglas no violan la letra de la Constitución, a partir de mayo de 2003 habrá en Argentina un gobierno de tránsito difícil pero con fuerza suficiente para controlar la situación, respetando al mismo tiempo las leyes. Si en cambio, la crisis se prolonga y no emerge un pacto interno, el gobierno será inevitablemente débil y, precisamente por su debilidad, podría abrir cauce a formas de autoritarismo que todavía no podemos imaginar.

Pablo Gerchunoff

Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires (Argentina)

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

© *Fundación Real Instituto Elcano 2011*

Subir ▲